

REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN



SALA LABORAL
Acta N°236

Medellín, diecisiete (17) de agosto de dos mil veintidós (2022)

En la fecha, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelven los recursos de apelación en el proceso ordinario laboral promovido por la señora **CATALINA POSADA SALDARRIAGA** contra **PROTECCIÓN S.A.** y **COLPENSIONES**.

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita.

ANTECEDENTES

Pretensiones

La demandante solicita que se declare la ineficacia de la afiliación al RAIS; y, en consecuencia, se reactive su afiliación a **Colpensiones** sin solución de continuidad.

En ese orden, se condene a **Protección S.A.** a trasladar a **Colpensiones**, todos y cada uno de los aportes efectuados al RAIS, incluidos los rendimientos.

Hechos

Como fundamento de sus pretensiones indica que se afilió al **ISS** hoy **Colpensiones** el 24 de enero de 1986 y se trasladó al RAIS administrado por **Protección S.A.** el 29 de junio de 1994.

Antes suscribir el formulario de afiliación al RAIS no le fue estudiada su situación pensional individual, así como tampoco se le suministró información acerca de la ventajas y desventajas comparativas existentes entre los regímenes pensionales consagrados en la Ley 100 de 1993.

Respuesta Colpensiones

Colpensiones por intermedio de apoderado indicó que es cierto que la actora fue su afiliada y se trasladó al RAIS, pero desconoce las condiciones en que tomó dicha decisión. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: inexistencia de la obligación de traslado entre regímenes pensionales, inexistencia de la obligación, por ausencia de uno de los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión de vejez, imposibilidad de aplicar precedente judicial y la inversión de la carga de la prueba, prescripción, buena fe e imposibilidad de condena en costas.

Respuesta Protección S.A.

Protección S.A. a través de apoderada indicó que es cierto que la actora se vinculó a ese fondo, precisando que antes de suscribir el formulario de vinculación recibió asesoría clara, correcta y adecuada.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de recursos públicos y del sistema de pensiones, inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración cuando se declara la nulidad o ineficacia de la afiliación e inexistencia de la obligación de devolver el seguro previsional cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa y porque afecta derechos de terceros de buena fe.

Sentencia de primera instancia

El Juez Tercero Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia del **23 de mayo de 2022**, declaró la ineficacia del traslado al RAIS a través de **Protección S.A.** toda vez que, esa administradora no demostró que brindara a la pretendida afiliada la información clara y necesaria acerca de las consecuencias de su elección por lo que dio aplicación al artículo 271 de la Ley 100 de 1993.

En lo referente a los efectos de la ineficacia, manifestó que los mismos no pueden ser asumidos por **Colpensiones**, por cuanto se trata de un tercero ajeno que administra un patrimonio público que no puede verse afectado por la

actuación de una AFP Privada, en esa medida las consecuencias no pueden ser la devolución de los dineros aportados por la afiliada junto con sus rendimientos por cuanto estas sumas resultan exiguas para el cumplimiento de una carga pensional.

En ese orden, debe darse aplicación al principio de que todo aquel que ocasiona un daño debe indemnizarlo, y en el presente caso esa indemnización se cumple a partir del reconocimiento de la pensión de vejez bajo las condiciones y parámetros establecidos en el régimen de prima media con prestación definida.

Dentro del mes siguiente al reconocimiento de la pensión de la actora **Protección S.A.** deberá solicitar a **Colpensiones** la realización de cálculo actuarial, con miras a que **Colpensiones** subrogue la obligación a cargo de la AFP privada y a **Colpensiones** a realizar el cálculo con el objetivo de que **Protección S.A.**

Esta decisión no la compartieron los apoderados de las partes, motivo por el cual impugnaron en los siguientes términos generales:

Recurso Protección S.A.

Protección S.A. a través de apoderada indicó que esa administradora cumplió con la obligación de suministrar información en los términos que le eran exigibles al momento de vinculación de la actora, debiendo destacar además que la actora como consumidora financiera tenía unas obligaciones de informarse con respecto al producto adquirido.

De otro lado, no se puede desconocer que existieron unos actos de relacionamiento de la actora con la entidad demandada por más de 20 años en los que participó activamente de su afiliación, sin que dentro de este trascurso de tiempo hiciera manifestación alguna contraria a mantener vigente su afiliación.

En lo referente con a la condena en perjuicios impuesta por el juez a-quo, se advierte que la misma no tiene sustento por cuanto un inconformismo económico con el valor de la mesada pensional no puede ser tomada como prueba de un daño, más cuando se echa de menos el estudio de los elementos de la responsabilidad civil contractual.

Con respecto a la condena en costas, solicita su exoneración por cuanto esa entidad siempre ha actuado de buena fe y en cumplimiento de la ley.

Recurso Colpensiones

El apoderado de **Colpensiones** se opuso a las órdenes impuestas a esa entidad, toda vez que esa entidad no está en la obligación de realizar cálculo actuarial, pues no se encuentra dentro de un supuesto de falta de afiliación, caso en el cual es aplicable este mecanismo de financiación de la pensión.

En lo referente con la declaratoria de ineficacia expresa que afecta la sostenibilidad económica del sistema y desconoce el principio de auto responsabilidad según la cual la afiliada bien pudo obtener la información que se echa de menos.

Recurso demandante

El apoderado recurrente solicita que se **revoque parcialmente** la decisión de primera instancia, por cuanto la misma desconoce la jurisprudencia actual en materia de consecuencias derivadas de la declaratoria de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales, por lo que llama la atención del Tribunal Superior de Medellín para que falle teniendo en cuenta este precedente.

Alegatos de conclusión

Corrido el término de traslado establecido en el artículo 15 de la Ley 2213 de 2022, el apoderado de **Colpensiones** presentó alegaciones en las que solicitó que se revoque la decisión de primera instancia puesto que la vinculación del actor al RAIS fue efectuada de manera libre y sin presiones.

En caso de que este argumento no fuera suficiente debe tenerse en cuenta que no es posible el traslado del demandante, en razón a que en la actualidad supera los 57 años de edad por lo que se encuentra inmerso en la prohibición consagrada en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, que tiene como finalidad la estabilidad financiera del sistema de pensiones, la cual se vería afectada de permitir que el actor retorne al RPM.

CONSIDERACIONES

Problema jurídico

Los problemas jurídicos a resolver en esta segunda instancia conforme a los

recursos de apelación interpuestos y el grado jurisdiccional de consulta, serán:
(i) Determinar si el acto jurídico que generó el traslado de régimen de la demandante resulta o no eficaz, (ii) Establecer cuáles son las consecuencias jurídicas de la declaratoria de ineficacia, y (iii) revisar si operó la prescripción.

Pruebas relevantes

Antes de resolver considera la Sala importante realizar las siguientes precisiones de conformidad con las pruebas que obran en el expediente:

1. La señora **Catalina Posada Saldarriaga** fue afiliada al **ISS** hoy **Colpensiones** el día **24 de enero de 1986** (12/pág.21).
2. Conforme se observa en extracto de la base de datos SIAFP la demandante tiene una afiliación efectiva a **Protección S.A.** vigente desde el **1 julio de 1994** (13/pág.35).

Efectuadas las anteriores precisiones procederá la Sala a resolver los problemas jurídicos puestos en su conocimiento:

El precedente jurisprudencial en materia de traslado de régimen pensional

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha elaborado un nutrido precedente en materia de la obligación de información de los fondos de pensiones, siendo sus sentencias fundantes la 31314 y 31989 del 9 de septiembre de 2008, a las que ha seguido una copiosa producción al resolver recursos de casación en las sentencias SL-1688-2019, SL-4360-2019, SL-4426 de 2019, SL-2611 de 2020, SL-1217 de 2021 y SL-1022-2022.

En las providencias citadas el Alto Tribunal fijó unos grados de exigencia de la información, dependiendo de las normas vigentes para la fecha en que se efectúe el vínculo a las administradoras de pensiones, estableciendo en lo temporal los siguientes momentos: (i) desde la fundación de las AFP, segundo momento, (ii) desde la expedición de la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 2241 de 2010 y (iii) a partir de la vigencia de la Ley 1748 de 2014 y el Decreto 2071 de 2015.

En el caso sometido a estudio, el traslado al RAIS a través de **Protección S.A.** se realizó en el primer momento, ciclo para el cual la jurisprudencia en interpretación del artículo 97 del Decreto 663 de 1993 ha exigido la demostración por parte de las administradoras de pensiones del cumplimiento

del deber entregar una información necesaria y transparente, conceptos que se explican en la sentencia SL-1452-2019 de la siguiente forma:

Información necesaria: consistente en la descripción de las características, condiciones, acceso y servicios de cada uno de los regímenes pensionales, de modo que el afiliado pueda conocer con exactitud la lógica de los sistemas públicos y privados de pensiones, lo que implica un comparativo entre las vigentes, así como de las consecuencias jurídicas del traslado.

Transparencia: La AFP a través de su promotor debe comunicar a su potencial afiliado en un lenguaje claro, simple y comprensible, los elementos definitorios y condiciones del régimen de ahorro individual con solidaridad y del de prima media con prestación definida, de manera que la elección pueda realizarse por el afiliado después de comprender a plenitud las reglas, consecuencias y riesgos de cada uno de los oferentes de servicios.

El anterior deber trae en lo procesal una carga que recae en la administradora de pensiones, y es demostrar que suministró al posible afiliado una información calificada, en la que se expliquen los beneficios y desventajas del cambio de régimen, para solo a partir de este conocimiento concluir que se garantizó su derecho al ejercicio de una libre selección de régimen pensional.

Sobre la **carga de la prueba** es importante la remisión a la sentencia SL4426-2019, donde la Corte expone los motivos por los cuales las administradoras deben demostrar que suministraron una información clara y transparente, lo que se explica desde la premisa que el afiliado presenta una afirmación indeterminada -la de que no recibió información- y es el fondo a quien corresponde demostrar que cumplió con sus deberes en esa materia, aspecto en el que por demás está en una mejor posición de ilustrar por cuanto debe conservar en sus archivos la documentación que soporta el traslado.

En lo que respecta al caso de autos, **Protección S.A.** al contestar la demanda sostuvo que suministró una asesoría clara, correcta y adecuada acerca de las condiciones para acceder a la pensión de vejez y sus principales diferencias con el RPM, sin embargo, más allá de estas afirmaciones no se trajo al proceso prueba de que se entregó al demandante una información necesaria y transparente para la fecha de la suscripción del formulario de afiliación¹,

¹En lo referente a la aplicación de la carga de la prueba se indicó en sentencia SL-081 de 2021, lo siguiente: “Por tal razón, si la parte actora alude a la ausencia de tal información, como ocurre en este caso, no es de su cargo demostrar tal omisión, pues corresponde a un hecho negativo. Por el contrario, es deber de la AFP traer a juicio los elementos de prueba que permitan establecer que, al momento de

debiendo recordarse que la suscripción de este documento apenas implica que hubo un consentimiento libre de vicios² pero no informado.

Sobre las obligaciones que recaen en las administradoras de pensiones es bastante ilustrativa la sentencia SL-782 de 2021, donde la Corte Suprema de Justicia indicó que según su línea jurisprudencial se debe declarar la ineficacia cuando quiera que:

...i) la insuficiencia de la información genere lesiones injustificadas en el derecho pensional del afiliado, impidiéndole su acceso al derecho; ii) no será suficiente la simple suscripción del formulario, sino el cotejo con la información brindada, la cual debe corresponder a la realidad; iii) en los términos del artículo 1604 del Código Civil, corresponde a las Administradoras de Fondo de Pensiones allegar prueba sobre los datos proporcionados a los afiliados, los cuales, de no ser ciertos, tendrán además las sanciones pecuniarias del artículo 271 de Ley 100 de 1993, y en los que debe constar los aspectos positivos y negativos de la vinculación y la incidencia en el derecho pensional.

Además, es importante recordar para responder al recurso interpuesto por la apoderada de **Protección S.A.** que los denominados actos de relacionamiento, no tienen la virtud de sanear la ineficacia, puesto que, con estos no se demuestra el suministro de información al momento de la vinculación aspecto que es el sancionado a través de esta figura.

Esta tesis es bien explicada por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en las sentencias SL-5686-2021 y SL-5688-2021. En la última de las citadas, se expresó:

Ahora, debe aclararse que si bien la Corte ha considerado que ciertos actos como las solicitudes de información de saldos, actualización de datos, asignación y cambio de claves, entre otros, pueden relacionarse con una señal nítida acerca del deseo de la persona de realizar una afiliación o bien desafiliarse del régimen o ente anterior (CSJ SL413-2018), y desde luego de permanecer en el fondo de su elección, esto es pertinente en un contexto fáctico en el que existan dudas razonables

la afiliación, brindó las explicaciones suficientes y veraces sobre las consecuencias, beneficios y desventajas del traslado de régimen pensional. Así, si a la administradora se le adjudica el incumplimiento de su deber profesional y de no actuar con diligencia, entonces incumbe a ésta acreditar que sí atendió tales obligaciones. Además, es la entidad quien se encuentra en mejor posición probatoria para allegar los elementos de prueba requeridos para esclarecer hechos como los que aquí se discuten.”

² Sentencias SL-4426-2019, SL-782 de 2021 y SL-1743 de 2021.

sobre esa intención de afiliación o desafiliación o se discute la materialización del acto jurídico.

Este último escenario no es el que caracterizó a este asunto ni el que generalmente se discute en las acciones de ineficacia. De hecho, puede afirmarse con toda contundencia que el traslado de la persona del régimen de prima media al de ahorro individual con solidaridad muestra, por regla general, un interés expreso -y no tácito- de pertenecer al último y proyectar ahí sus expectativas pensionales.

Sin embargo, ni esa afiliación inicial ni los tránsitos entre fondos privados denotan que la persona estaba debidamente informada acerca de las características, condiciones, acceso, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, así como de los riesgos financieros que asumiría en cada uno de ellos. En otros términos, no prueba por sí mismo y mucho menos genera una especie de presunción relativa a que la voluntad reflexiva de la persona afiliada al materializar su acto de traslado de régimen pensional y de los posteriores tránsitos entre administradoras estaban nutridos con la debida ilustración en los términos explicados, ni así lo ha previsto el legislador.

A partir de lo anterior, encuentra la Sala que al no demostrar **Protección S.A.** que cumpliera con su deber de informar, la consecuencia es que la afiliación efectuada a este fondo devenga ineficaz de conformidad con lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, lo que a **confirmar** la decisión apelada en este aspecto.

Del concepto y consecuencias de la ineficacia

El a-quo al resolver sobre las consecuencias de la ineficacia recordó que siguiendo lo enseñado por la teoría general de las obligaciones y lo enseñado por la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la declaratoria de ineficacia tendría unos efectos similares a los de la nulidad absoluta, que implican que el negocio celebrado vuelva a su estado inicial.

No obstante, advirtió que revertir el negocio jurídico poniendo a las partes en la situación inicial generaría un perjuicio para **Colpensiones**, quien como tercero ajeno al acto jurídico ineficaz no deben soportar carga alguna, por lo que para remediar la situación debe **Protección S.A.** reconocer la pensión de vejez en los términos establecidos en el RPM, con la obligación de solicitar la liquidación de cálculo actuarial ante **Colpensiones**, para que esta administradora se subrogue en el pago de pensión de vejez.

Para sustentar su condena, afirmó que todo aquel que ocasiona un daño está obligado a indemnizarlo, y que en el caso de autos, la omisión de la AFP al momento de la captación de la afiliada ocasionó un daño cuantificable en el valor de lo percibido como pensión y que el mismo puede ser asumido de forma directa por **Protección S.A.** con el reconocimiento de la pensión de vejez en los términos establecidos en la Ley 100 de 1993 para el régimen de prima media o bien procediendo a pagar a **Colpensiones** un título pensional con base en el cálculo actuarial efectuado por esta administradora.

A esta decisión se opusieron los apoderados de las partes, argumentando que no se cumplen los presupuestos para imponer la indemnización impuesta, se desconoce el precedente jurisprudencial ordinario y se impone obligaciones a **Colpensiones** que legalmente no se encuentran a su cargo.

Para resolver el tema objeto de discusión conviene recordar que conforme con la doctrina especializada³ la **definición de ineficacia** puede darse en dos sentidos, amplio y estricto.

El primero consistente en *“la ineptitud, la falta de idoneidad, la carencia de efectividad de un acto o negocio jurídico para desencadenar efectos negociales...”*, y que se deriva de los siguientes factores:

1. Los sujetos que participaron en los tratos prenegociales desatendieron alguna o algunas de las prescriptivas del segmento del orden jurídico imperativo que gobierna el ejercicio de la autonomía privada.
2. Que en ejercicio de la autonomía privada los tratantes introdujeron condiciones de hecho o condiciones de derecho en contenido del acto negocial que no se cumplieron.
3. Situaciones tales como el ajuste del acto estando viciada la voluntad de alguno de los sujetos negociales, la ilicitud de los motivos inductivos al perfeccionamiento del negocio, la celebración del negocio con fines a fraude a los acreedores y el cierre del acto en detrimento sensible de los intereses patrimoniales de alguna de las partes.

Entre tanto, en su segunda acepción, la del *stricto sensu*, la ineficacia implica que el negocio jurídico exista y sea válido, pero existen factores externos a su estructura que le privan de producir efectos.

³ Baquero, E. R. (2008). *La ineficacia en el negocio jurídico*. Alianza Editorial. Págs. 21-23.

Esta figura o mejor su ocurrencia es explicada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-345 de 2017, donde se expresa:

...la ineficacia en sentido estricto se presenta en aquellos casos en los cuales la ley, por razones de diferente naturaleza, ha previsto que el acto no debe producir efectos de ninguna naturaleza sin que sea necesaria la existencia de una declaración judicial en ese sentido

A partir de esta manifestación se encuentra que uno de los factores externos a los que se alude, se encuentran en la ley y conforme con lo explicado por la Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL-4360 de 2019 son aplicables a modo de sanción cuando se atente contra la libertad de selección de los afiliados del régimen pensional, lo que en el caso de las administradoras de pensiones se verifica cuando teniendo un deber legal de información omitieron suministrar la misma en condiciones suficiencia y objetividad.

En la providencia que se viene de citar la Corte hace una diferencia entre las figuras de inexistencia, nulidad absoluta y relativa e ineficacia en sus dos sentidos, para concluir que el artículo 271 de la Ley 100 de 1993 consagra la figura de la ineficacia en sentido estricto, pues en ella se sanciona: *“...cualquier atentado o transgresión contra el derecho del trabajador a la afiliación libre y voluntaria a un régimen pensional... con la ineficacia del acto.”*

Una vez dilucidado lo anterior, evidencia la Sala que al verificarse el cumplimiento de la trasgresión consagrada en la ley no otra puede ser la sanción aplicada que declarar su carencia de efectividad y la imperativa necesidad de que el orden legal desconocido se restablezca, debiéndose para este fin acudir al artículo 1746 del Código Civil que regula las restituciones mutuas y que establece la necesidad de que las cosas vuelvan al inicial, y esto en el caso de autos se traduce en que la demandante se entienda como afiliada al régimen de prima media.

Así las cosas, encuentra la Sala que le asiste razón al impugnante al indicar que la sanción consagrada por el legislador y aplicable al caso estudiado es la **ineficacia** y en ese orden se revocarán las ordenes y en su lugar se declarará que la señora **Catalina Posada Saldarriaga** estuvo afiliada al régimen de prima media sin solución de continuidad.

Implicaciones de la declaratoria de ineficacia para las administradoras de pensiones

La Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia desde la sentencia 31989 del 9 de septiembre de 2008 advirtió sobre la necesidad que existe cuando se declare lo que para aquel momento se denominó *nulidad* de que la administradora de pensiones que la generó devuelva todo lo recibido para lo cual se debe aplicar el artículo 1746 del Código Civil que trata sobre las restituciones mutuas en los eventos de nulidad relativa y el artículo 963 del Código de Comercio, que establece que el aumento del valor del bien quedara en cabeza del vendedor (en este caso de la afiliada) cuando la restitución se deba a incumplimiento del comprador (AFP RAIS).

Esta teoría fue desarrollada por más de 10 años por la jurisprudencia especializada laboral, que, en sentencia SL-4360 de 2019, explicó que al no existir un camino demarcado por el legislador cuando se declare la ineficacia en *stricto sensu*, la institución de inmediata referencia es la nulidad que consagra unas consecuencias idénticas, consistentes en la vuelta al *statu quo ante*.

Para la vuelta a ese estado inicial del negocio regulada en el artículo 1746 del CC, es necesario además tener en cuenta que la seguridad social se rige por unos principios que le son propios y que deben ser aplicados por el juez con el fin de que la vuelta a ese statu quo se dé a través de soluciones que resarzan y compensen los perjuicios ocasionados al afiliado, los que conforme con la jurisprudencia se resumen en los siguientes conceptos:

1. **Capital ahorrado:** Este concepto constituye el sustento financiero del pago de la prestación y conforme con lo dispuesto en el literal b) del artículo 113 de la Ley 100 de 1993 debe ser trasladado cuando exista movilidad del RAIS al RPM⁴.
2. **Rendimientos:** En igual sentido que el concepto anterior, soportan el pago de la pensión y se trasladan conforme a lo enseñado por el canon 113 ídem, destacando con respecto a estos como lo enseñara la Corte desde la sentencia 31989 de 2008, que su devolución se sustenta en que

⁴Se debe realizar su devolución conforme lo enseñado en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019, CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019 y CSJ SL4360-2019, CSJ SL-2877-2020, CSJ SL-1442-2021, CSJ SL-1440-2021 y SL-782-2021.

el mayor valor de la cosa aprovecha al vendedor cuando la restitución se debe al incumplimiento del comprador⁵.

3. Los **gastos de administración**⁶, concepto consagrado en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 y cuyo valor corresponde a 3 puntos de la cotización obrero patronal efectuada, la cual se destina al pago de seguros previsionales de invalidez y sobrevivientes, primas de seguros del Fogafín y los pagos correspondientes a la AFP por su gestión.

En lo referente al traslado de estos conceptos por parte de las administradoras del RAIS a **Colpensiones**, la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha encontrado 2 razones fundamentales para soportar esta orden: (i) la declaración de ineficacia implica que las administradoras del RAIS nunca debieron recibir estos beneficios⁷, (ii) la devolución debe ser plena y con efectos retroactivos, porque estos recursos serán utilizados para la financiación de una pensión, aspecto que busca mantener el principio de sostenibilidad financiera del sistema de pensiones⁸, y es por ello que la jurisprudencia ha indicado que estos conceptos deben ser reconocidos con cargo al patrimonio de los fondos de pensiones debidamente indexados⁹.

4. **Los aportes al fondo de garantía de pensión mínima:** el pago de estos aportes propio del RAIS y consagrado en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 no encuentra un equivalente en el RPM, motivo por el cual esta Sala ha sostenido que al declararse la ineficacia los dineros aportados por el afiliado a este fondo deben ser devueltos al RPM bajo los lineamientos del artículo 7 del Decreto 3995 de 2008 compilado en el DUR 1833 de 2016¹⁰.

A partir de lo explicado, encuentra la Sala que se debe **condenar a Protección S.A.** a trasladar a **Colpensiones** los siguientes conceptos: (i) El capital ahorrado en la cuenta individual de la señora **Catalina Posada Saldarriaga**, (ii) los rendimientos generados, (iii) los gastos de administración cobrados, sin lugar a descontar valores por concepto de prima de reaseguros de

⁵Se debe realizar su devolución conforme lo enseñado en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019, CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019 y CSJ SL4360-2019, CSJ SL-2877-2020, CSJ SL-1442-2021, CSJ SL-1440-2021 y SL-782-2021.

⁶ Se debe realizar la devolución de estos conceptos indexados conforme lo enseñado en las sentencias CSJ SL-3871-2021, CSJ SL-4062-2021 y CSJ 4063-2021.

⁷ Sentencia SL-4360-2019.

⁸ Sentencia SL-2877-2020.

⁹En este sentido se pueden leer las sentencias CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019, CSJ SL 782-2021, CSJ SL 1187-2021 y CSJ SL 1197-2021.

¹⁰En este sentido se pueden leer las sentencias CSJ SL 2877-2020, CSJ SL-936-2021, CSJ SL-938-2021, CSJ SL-1410-2021CSJ y SL1442-2021.

Fogafín, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, dineros que deberán ser indexados al momento de su traslado y asumidos con cargo a su propio patrimonio; y (iv) el aporte correspondiente al fondo de la garantía de pensión mínima.

Además, se ordenará a **Colpensiones** recibir estos recursos acreditándolos en términos de semanas cotizadas a nombre de su afiliada **Catalina Posada Saldarriaga**.

De la excepción de prescripción

En lo que tiene que ver con la prescripción, encuentra la Sala que esta excepción no está llamada a prosperar, puesto que, la ineficacia es el resultado del incumplimiento de un elemento estructural del negocio, por lo que, al no haber producido efectos, el solo transcurso del tiempo no tiene la virtualidad de integrar los elementos omitidos. En este sentido se remite a la lectura de las sentencias SL-1688 de 2019, SL- 3202 de 2021 y SL 3199 de 2021.

Costas

Sin costas en esta instancia.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida por el Juez Tercero Laboral del Circuito de Medellín, el día **23 de mayo de 2022**, en el proceso ordinario laboral promovido por la señora **CATALINA POSADA SALDARRIAGA** contra **PROTECCIÓN S.A.** y **COLPENSIONES** en cuanto declaró la ineficacia de la afiliación realizada al RAIS; **REVOCÁNDOLA** en cuanto a las ordenes proferidas, para en su lugar:

PRIMERO: CONDENAR a **PROTECCIÓN S.A.** a trasladar a **COLPENSIONES** dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, los siguientes conceptos recibidos con motivo de la afiliación de la señora **CATALINA POSADA SALDARRIAGA**: (i)

El capital ahorrado en la cuenta individual de la demandante (ii) los rendimientos generados, (iii) los gastos de administración cobrados, sin lugar a descontar valores por concepto de prima de reaseguros de Fogafín, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, dineros que deberán ser indexados al momento de su traslado y asumidos con cargo a su propio patrimonio; y (iv) el aporte correspondiente al fondo de la garantía de pensión mínima.

SEGUNDO: ORDENAR a COLPENSIONES que una vez recibidos estos recursos proceda a acreditarlos en términos de semanas cotizadas a nombre de la señora **CATALINA POSADA SALDARRIAGA**, quien se entenderá como afiliada al RPM sin solución de continuidad.

Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica por **EDICTO**.

LOS MAGISTRADOS



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ

Radicado 05001-31-05-003-2021-00063-01
Radicado Interno: P1452222
Asunto: Confirma y revoca sentencia



SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

Proceso	Ordinario
Demandante	Catalina Posada Saldarriaga
Demandado (s)	Protección S.A. y Colpensiones
Radicado	05001-31-05-003-2021-00063-01
Decisión	Confirma y revoca sentencia
Magistrado ponente	Carmen Helena Castaño Cardona

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/131> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 18 de agosto de 2022 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 18 de agosto a las 5:00pm

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO